

C.A. de Santiago

Santiago, veintiocho de enero de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando

Primero: Que comparece Jorge Humberto Díaz Silva, abogado, cédula de identidad N° 11.632.691-4, en representación de la Corporación Municipal de Renca, RUT N°70.931.100-K, ambos domiciliados para estos efectos en calle Los Aromos N°3339, comuna de Renca; y, en virtud del artículo 85 de la Ley 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, interponer recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta PA N° 000837 de fecha 30 de julio de 2024, dictada por el Superintendente de Educación.

Señala que, el 21 de marzo de 2023, la Corporación Municipal de Renca, entidad sostenedora del establecimiento Escuela N°1365 R.P. Gustavo Le Paige, RBD N°12243- 2, interpuso recurso de reclamación en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley N°20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, en contra de la Resolución Exenta N°2023/PA/13/0325, del 28 de febrero de 2023, de la Directora Regional (S) de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana, que aprueba proceso administrativo y aplica la sanción de multa en beneficio fiscal de 53 Unidades Tributarias Mensuales. Lo anterior en el marco de lo consignado en el Acta de Fiscalización N°221302002, del 10 de agosto de 2022; la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1700, del 16 de agosto de 2022, del Encargado de Fiscalización de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana que ordena instruir proceso administrativo y designa fiscal instructora.

Explica que mediante formulación de cargos N°2022/FC/13/0747, del 23 de agosto de 2022, la fiscal instructora de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana hace presente plazo para presentar descargos y medios de prueba formulando los siguientes cargos:

“CARGO N° 1. Contenido del protocolo de actuación en caso de maltrato y/o violencia escolar no se ajusta a la normativa educativa.

HECHO CONSTATADO: Establecimiento no remite antecedentes dentro del plazo otorgado por el fiscalizador que acrediten la subsanación de las observaciones efectuadas en el acta original N°211301701, en donde se constató lo siguiente:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMXZXSEDXDM

“Se verifica que el Protocolo de Actuación que contempla el reglamento interno del establecimiento educacional en casos de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la Comunidad Educativa, no incorpora:

- Los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos planteados.

- El procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplirán el deber de poner en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante, tan pronto lo advierta.

- El deber de los funcionarios del establecimiento, de poner en conocimiento o denunciar de manera formal a los Tribunales competentes de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante. Además, se deberá definir el procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplirán con la obligación de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal, cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el local que sirve de establecimiento educativo, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento. Tal como se señala en el acta de fiscalización.

NORMA TRANSGREDIDA:

- Anexo N° 6, Circular N°482, de 2018 que imparte instrucciones sobre Reglamento Interno de la Superintendencia de Educación.

- Numeral 5.9.6, Circular N°482, de 2018 que imparte instrucciones sobre Reglamento Interno de la Superintendencia de Educación,

TIPO INFRACCIONAL: *Infracción Leve. Artículo 78 de la Ley No 20.529.*

CARGO N° 2. SOSTENEDOR VULNERA DERECHOS AL APLICAR PROTOCOLOS NO AJUSTADOS A LA NORMATIVA EDUCACIONAL VIGENTE.

HECHO CONSTATADO:

“Se verifica de acuerdo a las evidencias presentadas, que el establecimiento educacional no resguarda la integridad física, psicológica y moral y/o el desarrollo integral de los estudiantes afectados e involucrados por cuanto no se acredita la aplicación de los contenidos mínimos establecidos en la normativa educacional, en este caso que se hayan contemplado plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos planteados”.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMXZXSEDXDM

NORMA TRANSGREDIDA:

- *Artículo 10 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009 del Ministerio de Educación.*

- *Artículos 16 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación*

TIPO INFRACCIONAL: *Infracción Menos Grave. Artículo 77 letra c) de la Ley N° 20.529”.*

Indica que, la Fiscal Instructora, dando por acreditados los cargos señalados con anterioridad, propuso aplicar la sanción de multa en beneficio fiscal de 53 Unidades Tributarias Mensuales, propuesta que fue confirmada por la autoridad regional mediante resolución que fue impugnada.

Asevera que, mediante acción de reclamación presentada por su parte, el 21 de marzo de 2023, se hacen presente las subsanaciones realizadas a las supuestas infracciones de carácter leves en las que habría incurrido el establecimiento educativo Gustavo Le Paige. En ese mismo orden de ideas, hace presente que no se habían ponderado los hechos y pruebas conforme a las reglas de la sana crítica y a su vez, reitera la falta de tipicidad del cargo N° 2 y la vulneración al principio jurídico non bis in ídem, cuestión que fue acogida por el ente administrativo fiscalizador.

Refiere que, mediante Resolución Exenta PA N°837 del 30 de julio de 2024, se desestima gran parte de las alegaciones expuestas en recurso de reclamación y se acoge parcialmente sobreseyéndose a la reclamante respecto del cargo número 2 y rebajando la sanción a 30UTM.

Expone que en el Acta de fiscalización se consignó que, el protocolo en casos de maltrato, acoso escolar y violencia entre miembros de la comunidad educativa carece del contenido exigido por la normativa educacional, sin tener presente los documentos y observaciones hechas presente en el recurso de reclamación administrativa.

Hace presente que, en la propia Resolución Exenta PA N°837 señala que “que efectivamente se han incorporado plazos para la resolución y pronunciamiento de hechos que se denuncien, tal como el plazo para el reporte de la situación, recopilación de antecedentes y activación del protocolo (fs 700 y 693) y un plazo de 05 días hábiles para la investigación. (fs 699)”. Pese a lo anterior, reitera el ente fiscalizador, que las subsanaciones realizadas no serían suficientes, pues no se detectaría un plazo de pronunciamiento para casos de violencia en el protocolo. También declaró que se habría infringido la segunda y tercera observación del hecho constatado, sobre la obligación de denuncia, pues



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMXZXSEDXDM

no se define un procedimiento conforme lo exige la normativa educacional, por lo cual mantiene dichas observaciones.

Señala que la Resolución Exenta PA N°000837, reclamada en estos autos, configura el incumplimiento en que habría incurrido la Corporación, en el marco de la infracción, en cuanto al cargo N°1, a la normativa contenida, en primer lugar, en el Anexo 6 de la Circular N°482, de 2018, que imparte instrucciones sobre Reglamento Interno de la Superintendencia de Educación (dicho anexo refiere al contenido mínimo del protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa) y, en segundo lugar, en el Numeral 5.9.6, de la Circular mencionada, sobre estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.

Afirma que es posible identificar que, del análisis del caso, no se consideraron circunstancias relevantes para hacer una reflexión de acuerdo con la sana crítica, en atención a que no se valoraron ni se apreciaron debidamente los antecedentes acompañados en su oportunidad. El Manual de Convivencia y Reglamento Interno del año 2022 que se acompañó en la etapa de descargos mediante el Ord. N°199 del 05 de septiembre de 2022, incluía el flujograma del procedimiento aplicable ante la activación del Protocolo de actuación ante situaciones de Acoso Escolar en su Anexo N°12, habiéndose observado que era ilegible, en condiciones que se envió en formato PDF, pudiendo en la etapa de análisis aumentar o disminuir la visualización de la imagen para una mejor resolución. En ese mismo sentido, continua, se subsanaron las observaciones realizadas al Anexo N°13 donde consta el Protocolo de actuación ante agresión física.

Expresa, sobre la observación de no tener incorporado el procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplirán el deber de poner en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante, tan pronto se advierta, que se habría recogido lo señalado por el ente fiscalizador y pese a que ya se regulaba en el protocolo de vulneración de derechos, se habría incorporado de manera expresa en el Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso y violencia escolar en establecimientos que son parte de la red de educación pública.

Indica que en la resolución que se reclama se plantea que en el Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso y violencia escolar en establecimientos que son parte de la red de educación pública de Renca, que fue



acompañado en la de fiscalización administrativa no se subsanó lo relativo al plazo de resolución de los casos de violencia escolar, es por ello, prosigue el recurso, que se incorporaron plazos para el caso particular de violencia escolar, pese a que se establecían de forma clara y precisa a propósito de los casos de acoso escolar, que son homólogos para estos efectos, pero con el solo afán de cumplir íntegramente con cada una de las observaciones del ente fiscalizador, el sostenedor también los reguló de forma expresa en el citado Protocolo.

Precisa que la entidad fiscalizadora señala que, el dar cumplimiento a los contenidos mínimos requeridos por la normativa educacional estando tipificados en diversas partes del Reglamento Interno, no es suficiente alegación para efectos de contar con el protocolo ajustado a la normativa por deber contener la información solicitada de forma íntegra. Asegura el reclamante que esta es una interpretación realizada con el único objetivo de sancionar. Añadiendo que la nueva normativa educacional que instruye agregar contenidos a los Reglamentos Internos y Protocolos, opera de pleno derecho una vez promulgada y publicada la ley, entendiéndose incorporada a estos cuerpos de pleno derecho, sin perjuicio de la obligación de actualizarlos.

Alega que la Circular N°482 de 2018, en ningún momento señala una sanción específica o especial respecto de la conducta desplegada, considerando que el incumplimiento por el que se sanciona no es la existencia o no de un reglamento interno junto con su protocolo de actuación, sino que es a lo más el cumplimiento imperfecto de esta obligación. La resolución reclamada, afirma el recurso, adolece de una falta de precisión normativa de un hecho constitutivo de infracción, que atenta contra el principio de tipicidad

Sostiene que, en cuanto a lo detallado en el punto 5.9.6. de la Circular N°482, su parte ha dado total cumplimiento a los párrafos que componen esas estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa, habiéndose acreditado la existencia del protocolo respectivo dentro del Reglamento Interno del establecimiento educacional

Asegura que la normativa educacional citada no ha sido infringida en orden a que los contenidos mínimos del Anexo N°6 de la Circular N°482, contempla puntos que están incluidos en el Reglamento ya informado en la oportunidad procesal respectiva. Con todo, el Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso y violencia escolar, se encuentra actualizado de acuerdo con el compromiso adquirido e informado en la etapa de descargos.



Afirma que, en virtud del artículo 78 de la ley N°20.529, las infracciones de carácter leves pueden ser sancionadas con una amonestación.

En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad, argumenta el recurso, no se aplicaron todas las indicadas por su parte, a saber: importancia del daño causado o del peligro ocasionado, beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en los hechos constitutivos de la misma, buena fe, conducta anterior y que, una disminución en la subvención que ingresa a los establecimientos de la comuna, para pagar una multa a beneficio fiscal, es una pérdida de oportunidad para todos los niños y niñas de cada comunidad.

En cuanto al principio de proporcionalidad hace presente lo desproporcionada que resulta la sanción de multa de 30 UTM, pues en ningún caso se constata un actuar doloso, si no a lo más una discrepancia en la interpretación de los hechos, que a lo sumo podría configurar un acto de carácter imperfecto.

Manifiesta que, para el caso que se confirme el cargo N°1, debido a las medidas adoptadas en la activación del respectivo protocolo, corresponde aplicar la sanción menos lesiva a su parte.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y, en definitiva, se deje sin efecto la Resolución Exenta PA N°000837, del 30 de julio de 2024, que ordena la sanción de multa a beneficio fiscal de 30 UTM, por no ajustarse a derecho y, en subsidio, rebajarla a lo que esta Corte en derecho determine.

Segundo: Que, evacuando informe, la Superintendencia de Educación solicita se rechace el recurso con condena en costas.

Señala que, el 31 de marzo de 2022, ingresó al sistema integrado de atenciones de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación, la denuncia CAS-08230, por presunto maltrato a estudiantes y/o párvulos. Luego, mediante la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1700, del 16 de agosto de 2022, del Encargado de Fiscalización de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana, se ordenó instruir Proceso Administrativo, en contra de establecimiento educacional Escuela N°1365 R.P. Gustavo Le Paige. Posteriormente, mediante acto administrativo del fiscal instructor a cargo N° 2022/FC/13/0747, del 23 de agosto de 2022, válidamente notificado mediante correo electrónico de igual fecha, se formuló el siguiente cargo en virtud de lo consignado en el acta de fiscalización N°221302002, del 10 de agosto de 2022:

“Cargo N°1: contenido del protocolo de actuación en caso de maltrato y/o violencia escolar no se ajusta a la normativa educacional.



Cargo N°2: sostenedor vulnera derechos al aplicar protocolos no ajustados a la normativa educacional vigente”.

Finalmente, la entidad sostenedora, el 21 de marzo de 2023, presentó recurso de reclamación en contra de la resolución precedentemente enunciada, el cual fue resuelto mediante Resolución Exenta PA N°000837, del 30 de julio de 2024, que acogió parcialmente el recurso de reclamación administrativa, sobreseyendo el cargo N° 2 y rebajando consecuentemente la sanción aplicada, por la sanción de multa a beneficio fiscal de 30 UTM.

Indica que, en cuanto a la normativa aplicable al cargo N° 1, ésta corresponde a la Circular que imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado, aprobada por la Resolución Exenta N°482, de 2018, la cual señala en su acápite 5.6.9 “estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa”. Agrega que debe considerarse el “Anexo N°6: Contenido mínimo del protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa”, de la circular en comento.

Afirma el Servicio que el incumplimiento de lo señalado precedentemente configura en la especie la infracción de carácter leve establecida en el artículo 78, de la ley N°20.529, del Ministerio de Educación, que establece

En cuanto a las alegaciones contenidas en la reclamación judicial, expone, respecto de la valoración de los antecedentes acompañados en el procedimiento sancionatorio, que el reclamante sostiene que no se valoraron debidamente los antecedentes acompañados en la oportunidad procesal correspondiente, lo que vulneraría el principio de la sana crítica. No obstante, prosigue el informe, el análisis de los hechos y antecedentes debe realizarse bajo el principio de discrecionalidad técnica del órgano administrativo, que tiene la potestad de valorar los documentos aportados según su relevancia y pertinencia en el contexto del caso. La Superintendencia de Educación actuó dentro de sus facultades legales, evaluando la documentación presentada y determinando que no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Además, el hecho de que la información se haya entregado en formato PDF no exime al sostenedor de su obligación de presentar documentos legibles y comprensibles, especialmente en un proceso sancionador, donde la claridad y la exhaustividad de la información son cruciales para la correcta toma de decisiones. La Superintendencia, en ejercicio de su facultad fiscalizadora, no estaba obligada a



solicitar nuevamente la documentación faltante o ilegible, ya que era responsabilidad del administrado garantizar que la información presentada cumpliera con los estándares requeridos.

Dado lo anterior, expresa la recurrida, debe quedar asentado que el hecho infraccional detectado, descrito en el acta de fiscalización N°221302002, del 10 de agosto de 20202, y que sirvió de fundamento del cargo uno formulado en contra del establecimiento educacional, refirió a que el contenido del protocolo de actuación en caso de maltrato y/o violencia escolar no se ajusta a la normativa educacional, toda vez que su protocolo de maltrato carecía de los siguientes elementos mínimos del Anexo 6 de la Circular N°482:

- Los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos planteados.

- El procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplirán el deber de poner en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante, tan pronto lo advierta.

- El deber de los funcionarios del establecimiento, de poner en conocimiento denunciar de manera formal cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante. Además, se deberá definir el procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplirán con la obligación de denunciar.

De este modo, asegura el Servicio, la ponderación realizada en sede administrativa, se advierte la forma en que se substanció válidamente el procedimiento sancionatorio, otorgando al sostenedor la posibilidad de presentar la documentación tanto durante la etapa de fiscalización y, posteriormente, ejercer su derecho a defensa y presentar medios de prueba a fin de desacreditar los hechos infraccionales descritos en el acta de fiscalización, luego de formularse el cargo en su contra.

Expone que, luego, en la fase recursiva, mediante la reclamación administrativa que dedujo con fecha 21 de marzo de 2023, a fojas 724 del expediente administrativo, la que también fue objeto de un correcto análisis plasmado en la resolución exenta impugnada, teniendo a la vista que en su reclamación administrativa, se procedido a revisar todos los antecedentes que obran en el expediente administrativo, en virtud de lo cual se confirma que el instrumento acompañado por la sostenedora en la etapa de denuncia carecía del contenido mínimo establecido en la Circular en mención, como, asimismo, los documentos acompañados en la etapa de descargos no incorporaron las



observaciones realizadas por el fiscalizador. Luego analizado el Protocolo acompañado en la instancia recursiva, se observa que efectivamente se han incorporado plazos para la resolución y pronunciamiento de hechos que se denuncien, tal como el plazo para el reporte de la situación, recopilación de antecedentes y activación de protocolo y un plazo de 05 días hábiles para la investigación.

Por otra parte, en cuanto a la segunda y tercera observación del hecho constatado, se observa una vaga referencia a la denuncia que deben efectuar y eventual solicitud de medida de protección que deben solicitar “los funcionarios del establecimiento”, sin embargo, no se define un procedimiento conforme lo exige la normativa educacional, por lo tanto, dichas observaciones se mantienen.

Inclusive, el acto administrativo impugnado cumplió con motivar que si bien se integraron algunos elementos con el objetivo de corregir el hecho infraccional, esto solo se logra de manera parcial, por lo que esta autoridad conmina a la sostenedora a precisar la regulación y fortalecer los mecanismos a fin de otorgar mayor certeza y comprensión a los miembros de la comunidad educativa al momento de aplicar estos instrumentos, como, asimismo, a regular el procedimiento en virtud del cual los “funcionarios del establecimiento” efectúen la denuncia o soliciten una medida de protección, debiendo ajustar su protocolo conforme dispone la normativa educacional.

Sin perjuicio de ello, se valoraron esos elementos añadidos por la entidad sostenedora en el curso del procedimiento administrativo, como una mejora del instrumento interno del establecimiento que se valoraron positivamente por esta autoridad conforme a la sana crítica, lo que se tuvo en consideración al momento de morigerar considerablemente el quantum de la sanción aplicada.

Enfatiza que los establecimientos cuenten con reglamentos internos ajustados a la normativa educacional, toda vez que se transforman en herramientas que contribuyen a mejorar la gestión educativa y la convivencia escolar, permitiendo anteponerse a los hechos, dando soluciones concretas, rápidas y eficientes. En relación a lo expuesto, hace presente que esta exigencia no adolece de falta de tipicidad como expresa la sostenedora, pues la Circular en comento exige tener protocolos específicos cuyo contenido mínimo está definido en cada uno de sus anexos, debiendo tener presente, además, lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 20.529.

Alega que las alegaciones y contenidos señalados por la recurrente en esta etapa judicial, en nada hacen variar lo resuelto por esta Superintendencia, sino por el contrario, refieren a una reiteración o insistencia sobre antecedentes que



ya fueron analizados de forma pormenorizada por esta repartición pública, lo que se aleja y desconoce la naturaleza de la reclamación judicial del artículo 85 de la Ley N°20.529, el que se constituye como un recurso de legalidad y no de instancia, quedando vedada la discusión sobre el mérito y/o aspectos de hecho analizados correctamente por la autoridad administrativa.

Refiere que el reclamante arguye que la normativa educacional fue cumplida, aunque de manera imperfecta, lo cual, según su criterio, no debería conllevar una sanción, sin embargo, este planteamiento contradice el principio de legalidad, que rige tanto para los administrados como para la Administración en su conjunto, en este orden de ideas la Ley N° 20.529 establece que los establecimientos educacionales deben cumplir con los requisitos normativos en su totalidad, no bastando con un cumplimiento parcial o imperfecto. En este contexto, el principio de tipicidad, que garantiza que las conductas infractoras están claramente definidas en la ley, resulta clave el artículo 78 de la Ley N° 20.529, que establece que las infracciones leves, como las señaladas en el recurso, pueden ser sancionadas si no son subsanadas en el plazo prudencial que otorgue el fiscalizador. En este caso, el incumplimiento de las exigencias normativas, aun cuando se considere leve, constituye una infracción sancionable, especialmente si no se subsanaron en el tiempo y forma determinados

Expone que queda de manifiesto que el recurrente en su reclamación intenta relativizar el impacto de la infracción al señalar que no hubo un beneficio económico derivado de la misma y que el incumplimiento no afectó directamente a los estudiantes. Sin embargo, la normativa educacional no condiciona la sanción a la existencia de un daño o beneficio económico.

Respecto de la proporcionalidad, hace presente que la resolución reclamada en autos rebajó la sanción impuesta, en el rango permitido por la ley. Añade que la Superintendencia ponderó todos los elementos descritos en el artículo 73 letra b) inciso 2° de la Ley N° 20.529, para definir la magnitud de la sanción cuya cuantía de la sanción fue determinada.

Respecto la falta de ponderación de beneficio económico y de los otros elementos del artículo 73 letra b) de la Ley N°20.529, señala que los criterios legales de determinación de la sanción se aplican de acuerdo con la naturaleza del hecho infraccional. Así, la circunstancia que el establecimiento haya (o no) obtenido beneficio económico con ocasión de la infracción no implica que a la recurrente se le tuvo que eximir de la sanción de multa o se le tuvo que aplicar una sanción no pecuniaria, habida consideración que los bienes jurídicos vulnerados en la especie



En cuanto a la falta de intencionalidad, explica que, en materia administrativa sancionatoria, el principio de culpabilidad se traduce en que, una vez constatadas las infracciones por el fiscalizador, la Superintendencia debe determinar si existe responsabilidad en el hecho que vulnera la normativa educacional vigente, y si es que existen circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que permitan eximir de responsabilidad al administrado. De esta manera, en el caso de marras la intencionalidad en la comisión de la infracción (en este caso la supuesta falta de ella) no constituyó, por un lado, un impedimento para sancionar al establecimiento y por otro, un elemento obligatorio a observar para atenuar las sanciones de multa, dado que el elemento de culpabilidad en Derecho Administrativo Sancionador, a diferencia de lo que ocurre en Derecho Penal, no se relaciona con la reprochabilidad, sino con la responsabilidad.

Respecto a la petición subsidiaria de sustitución de la multa a beneficio fiscal, por la sanción de rango inferior, hace presente que el inciso final del artículo 78 de la Ley N° 20.529, dispone que *“en caso de infracciones que tengan el carácter de leve, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley”*.

Finalmente, refiere que, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley objeto está dado para determinar la legalidad o ilegalidad del acto sancionatorio dictado por la Superintendencia. Por ende, no adoleciendo el acto sancionatorio de vicio de ilegalidad, la solicitud de rebaja de sanción resulta improcedente, toda vez que la resolución impugnada ha sido dictada válidamente, conforme ha quedado asentado.

Tercero: Que el artículo 85 de la Ley 20.529 dispone: *“Que los afectados que estimen que las resoluciones del Superintendente no se ajusten a la normativa educacional, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de un plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución que se impugna, para que las deje sin efecto”*. La Corte revisará la legalidad de lo resuelto y no su mérito.

Cuarto: Que luego de instruir un sumario administrativo, son dos los cargos primitivamente formulados por la Fiscal Instructora a la parte recurrente, y finalmente acoge parcialmente la reconsideración interpuesta y respecto del primer cargo rebaja la multa impuesta, y se la sobresee respecto del segundo cargo.

Por el cargo N°1, esto es *“No contar con un protocolo de actuación en caso de maltrato y/o violencia escolar que se ajuste a la normativa educacional”*, calificada como **infracción leve**, ha vulnerado el artículo 78 de la Ley 20.259,



además del Anexo 6, Circular N°482, de 2018 que imparte instrucciones sobre Reglamento Interno de la Superintendencia de Educación y Numeral 5,9, 6 Circular 482, de 2018 que imparte instrucciones sobre Reglamento Interno de la Superintendencia de Educación.

Quinto: Que en lo que dice relación con la petición subsidiaria, formulada por la recurrente, el artículo 78 de la Ley 20.529, señala que *“Son infracciones leves aquellas en que incurran los sostenedores o establecimientos educacionales contra la normativa educacional y que no tengan señalada una sanción especial”*, cuyo es el caso de autos, puesto que, si bien contaban con un protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso y violencia escolar, este no se ajustaba a la normativa educacional, pues no tenía incorporado el procedimiento conforme al cual los funcionarios cumplían con el deber de poner en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya vulneración de derechos en contra de un estudiante, y no contempla plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los conflictos planteados, infracción que fue calificada como leve y conforme al artículo 78 citado, *“En caso de infracciones que tengan el carácter de leve, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación”*. Así las cosas, se acogerá la petición subsidiaria y se sustituirá la sanción de multa por la de amonestación.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 20.529, **se acoge** la reclamación deducida por la Corporación Municipal de Renca, sólo en cuanto se sustituye la sanción de multa por la de amonestación impuesta por la Resolución Exenta PA N°000837 de fecha 30 de julio de 2024, dictada por la Superintendencia de Educación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra M. Loreto Gutiérrez

N° Contencioso Administrativo-562-2024.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la ministra señora María Loreto Gutiérrez Alvear y por la abogada integrante señora Sara Moreno Fernández. No firma la ministra señora Gutiérrez por hacer uso de feriado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMXZXSEDXDM



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMXZXSEDXDM

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M. y Abogada Integrante Sara Genevieve Moreno F. Santiago, veintiocho de enero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintiocho de enero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SMXZXSEDXDM